

**Informe jurídico 0486/2009**

La consulta plantea si el acceso a los datos del consultante que obran en el expediente administrativo aportado a un proceso judicial, por personas del Ayuntamiento que resulta ser parte en dicho procedimiento judicial, se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

**I**

De los términos de la consulta se desprende que el Ayuntamiento para el que trabaja como funcionario el consultante, estaría tratando sus datos personales en virtud de la existencia de la relación jurídico-administrativa que existe entre ambos, lo que determina que dicho tratamiento de datos de carácter personal se pueda efectuar sin el consentimiento del interesado en cuanto el mismo sea necesario para el desenvolvimiento de la relación funcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LOPD que dice: “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.”

Por otra parte, según la consulta, personas del citado Ayuntamiento habrían accedido a los datos obrantes en su expediente administrativo personal que incluye datos de salud, con la finalidad de proceder a la contestación de la demanda judicial interpuesta por el propio consultante dentro del procedimiento contencioso-administrativo a que la misma dio lugar, así como para efectuar valoraciones perjudiciales de su persona, que no identifica.

Como punto de partida es preciso señalar que la comunicación planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”

Tal y como indica el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no sería preciso contar con el consentimiento del afectado “Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el

Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las atribuciones que tienen atribuidas “, conforme señala el artículo 11.2 d) de la LOPD.

En consecuencia, si la cesión de los datos de su expediente administrativo efectuada por el Ayuntamiento lo ha sido al Juez o Tribunal que esté conociendo de la demanda interpuesta por el propio interesado, tal cesión encontraría su encaje en el supuesto del artículo 11.2 d) citado, siempre y cuando la comunicación se haya efectuado con arreglo a lo solicitado por el órgano judicial. Es decir, con carácter general, siempre que una autoridad judicial considere necesaria la aportación de datos personales obrantes en poder de la Administración, en los términos que el propio Órgano determine, será necesario aportar dichos documentos, pudiendo resultar la decisión de la entidad a que se solicitara la información de no facilitarla o facilitarla parcialmente, contraria a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, a cuyo tenor “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

En otro orden de cosas, es criterio reiterado de esta Agencia que dicho tipo de cesiones quedan amparadas por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada por el artículo 24 de la Constitución.

En este sentido, la Constitución Española de 1978, en su artículo 24.2, garantiza el “derecho de todos a ser informados de la acusación formulada contra ellos”, información que, de acuerdo con los principios generales que rigen la actividad punitiva del Estado, tanto en el ámbito penal, como en el administrativo, debe abarcar el conocimiento por parte del encartado del hecho punible o acto sancionable objeto de imputación, así como de las circunstancias de hecho concurrentes que pudieran afectar a su derecho de defensa.

Toda comunicación de datos del consultante que no sea necesaria para el desenvolvimiento de la relación funcional o para el desarrollo del proceso judicial mencionado, requerirá el consentimiento del titular de los datos (artículo 11.1 de la LOPD), salvo que tuvieran su origen en cualquiera de las demás causas recogidas en el número 2 de este artículo.

## II

Por otra parte, el artículo 4 .2 de la LOPD señala que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.”

Así mismo, el artículo 10 de la LOPD regula el deber de secreto, disponiendo:” El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos,

obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, o en su caso, con el responsable del mismo.”

Por otra parte, el artículo 9 de la LOPD impone al responsable del tratamiento de los datos “el deber de adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.”

Cualquier incumplimiento de lo señalado en los tres apartados anteriores por parte del responsable del fichero de datos, podría dar lugar a la responsabilidad que señala el artículo 43 de la LOPD.

### III

El consultante mantiene dudas en su escrito respecto a la aplicación a su caso del artículo 13 de la LOPD que dice: “1.Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad.

2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad.

3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los criterios de valoración y programa utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto.

4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado.”

El artículo 36.1 del Real Decreto 1720/2002 completa este artículo 13 de la LOPD al señalar: “(.....)a evaluar aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o conducta.”

El supuesto regulado en estos artículos podría referirse al caso consultado, siempre que en éste concurrieran los siguientes requisitos:

1. Que los efectos jurídicos de la decisión afecten a la persona de forma significativa.
2. El fundamento único de la decisión debe estar constituido por información proporcionada por el tratamiento.

3. La decisión ha de tener por objeto evaluar determinados aspectos de la personalidad del afectado.

Si en el caso del consultante, faltase cualquiera de los requisitos señalados, no estaríamos ante la posibilidad de impugnar la decisión a tenor de lo dicho por el artículo 13 de la LOPD y 36 del Reglamento que la desarrolla.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.